

Capítulo IX. La gran transformación, 1989-1999



El 9 de julio de 1989, el presidente Alfonsín entregó el poder al electo Carlos Saúl Menem. Se trataba de la primera sucesión constitucional desde 1928 (y de la primera vez, desde 1916) que un presidente dejaba el poder al candidato opositor. Y comenzó un nuevo ciclo de sucesivos gobiernos peronistas. El presidente electo puso su sello en la primera fase del segundo peronismo: el **menemismo** (un personaje caricaturesco y su vez un gran cipayo). Menem asumió en medio de la crisis hiperinflacionaria e inició un conjunto de reformas económicas y estatales, cuyos efectos se fueron manifestando gradualmente. En 1995, fue reelecto, por cuatro años, luego de que la reforma constitucional de 1994: que habilita esa posibilidad y acorta el mandato en 4 años. En 1999, al fin de su mandato, entregó el poder a Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, una coalición opositora que incluía a la Unión Cívica Radical (UCR). El peronismo conservó importantes posiciones en los gobiernos provinciales y en el Congreso y los principios institucionales parecían consolidados.

Ajuste y reforma del Estado

Menem inició su gobierno en medio de una crisis terrible: una hiperinflación de un 200% y en diciembre en el 40%. Mientras todo el mundo convertía sus australes en dólares, grupos de personas desesperadas asaltaron tiendas y supermercados, y la represión dejó varios muertos. Con un fisco en bancarrota, moneda licuada, sueldos inexistentes y violencia social, quedó expuesta la incapacidad del gobierno radical para gobernar y hasta para asegurar el orden. Para Menem estaba en cuestión de legitimar el poder que había ganado en las urnas.

Para enfrentarla menem todo receta genérica, elaborada en EEUU elaborada en los 80s para América Latina en el llamado “Consenso de Washington”, transmitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y difundida por economistas y (lo cual era favorable a quienes la crearon no para quien fue difundida)

era necesaria una profunda transformación de la relación entre el Estado y la sociedad. Los gastos del Estado benefactor eran excesivos. Subsidios y prebendas restaban eficiencia a la economía y agravaron el déficit fiscal, que se saldaba con emisión monetaria. La pertinaz inflación había desembocado finalmente en el colapso fiscal. La solución consistía en una drástica reforma y un ajuste del Estado, que a la vez suprimiera el déficit fiscal y liberara a la economía de una “tutela asfixiante”.

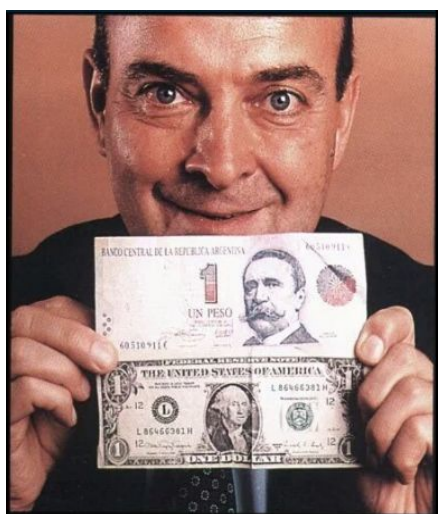
La política menemista era totalmente neoliberal y seguía los pasos que había iniciado Martínez de Hoz en 1976.

En 1989 la hiperinflación allanó las resistencias y convenció a todos de que no había alternativa a la reforma y el ajuste. Carlos Menem fue el ejecutor también aprovechó el momento de una creciente necesidad de orden y estabilidad que las reformas (hasta entonces rechazadas) resultarían tolerables, y además le permitirían reunir el apoyo necesario para consolidar su poder. Debía ganar la confianza del establishment económico, pero no lo ayudaban ni sus antecedentes ni tampoco su campaña electoral, de estilo peronista tradicional. Pero con notable audacia, apartándose de su tradición ideológica y discursiva, dio un giro extraordinario y anunció la necesidad de una “cirugía mayor sin anestesia”, abandonó las recetas del estatismo, aplaudió la “apertura económica”, instó a la necesidad y de las privatizaciones y se burló de quienes “se habían quedado en el 45”. También apeló a gestos casi desmedidos: se abrazó con el almirante Rojas, se rodeó de los Alsogaray (padre e hija) y confió el Ministerio

de Economía a un alto directivo del grupo Bunge y Born, de quien se decía que traía un plan económico salvador. El gobierno emprendió el camino de la reforma y el ajuste estatal. El Congreso sancionó dos grandes leyes, que daban al presidente más poderes. La ley de emergencia económica suspendió todo tipo de subsidios, privilegios y regímenes de promoción, y autorizó el despido de empleados estatales. La de reforma del Estado declaró la necesidad de privatizar una extensa lista de empresas estatales. De un plumazo se eliminó el llamado “capitalismo asistido” y se redujo drásticamente el déficit fiscal.

El gobierno se concentró en la rápida privatización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y de Aerolíneas Argentinas. Perseguía varios propósitos: demostrar voluntad y capacidad reformista, obtener dinero contante para el fisco, dar señales a los acreedores externos. Así, se convocó a grupos mixtos, integrados por empresarios locales, operadores internacionales expertos y banqueros que aportaban títulos de la deuda externa; éstos fueron aceptados a su valor nominal, de modo que los acreedores cambiaron papeles de dudoso cobro por activos empresariales (una estafa). Se aseguró a las nuevas empresas un fuerte aumento de tarifas, escasas regulaciones y una situación casi monopólica. En términos parecidos, en poco más de un año se habían privatizado la red vial (panamericana), correos, los canales de televisión, buena parte de los ferrocarriles y de las áreas petroleras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). También se proclamó la apertura económica.

Pese a la mejora en los ingresos, sobre todo por los fondos de las privatizaciones, no se alcanzó el equilibrio fiscal y la inflación se mantuvo alta. A fines de 1989 se produjo una segunda hiperinflación, con saqueos y pánico, aunque pasó más silenciosamente. El nuevo ministro de Economía, **Antonio Erman González**, del íntimo círculo presidencial, actuó de manera drástica. Con el **Plan Bonex** se apropió de los depósitos a plazo fijo de los ahorristas, que cambió por bonos en dólares de largo plazo. A eso agregó una fuerte restricción de los pagos



estatales y de la circulación monetaria. La inflación se redujo, pero a costa de una fortísima recesión. Para solucionarlo, se apeló de nuevo a la emisión, y la inflación volvió a desatarse. A fines de 1990, con la economía otra vez en estado crítico, estalló el escándalo del Swiftgate.

El embajador estadounidense denunció que el frigorífico Swift era presionado por miembros del gobierno que reclamaban coimas a cambio de leyes a favor de Swift. El tráfico de influencias era común en el gobierno; un ejemplo de esto fue el diputado José Luis Manzano, se hizo célebre por la frase “yo robo para la Corona”. En este caso, la intervención del gobierno estadounidense provocó una serie de cambios y rotaciones en el gabinete que a principios de 1991, llevaron al Ministerio de Economía al entonces canciller Domingo Cavallo (foto). Cavallo encaró el problema de la inflación mediante la trascendente **ley de convertibilidad**, que durante diez años marcó las pautas de

la economía. Se estableció una paridad cambiaria fija; emblemáticamente, un dólar equivaldría a un nuevo “peso” (terminando con el austral) y se prohibió al Poder Ejecutivo emitir moneda por encima de las reservas, de modo de garantizar esa paridad. El Estado consiguió desalentar las perspectivas inflacionarias, pero a costa de renunciar a su más importante instrumento de intervención del banco central en la economía. terminó así una historia de reducción de la capacidad de acción del Estado, iniciada en 1976 y profundizada luego con el endeudamiento externo. Los resultados inmediatos fueron muy exitosos: cayó la inflación y también la fuga de divisas, volvieron capitales emigrados, bajaron las tasas de interés, hubo una rápida reactivación económica y mejoró la recaudación fiscal.

La convertibilidad fue reforzada por otras dos disposiciones. La reducción general de aranceles (cayeron a una tercera parte) concretó la tantas veces anunciada apertura económica. Para mejorar rápidamente la recaudación fiscal, se elevaron los impuestos más fáciles de cobrar (al Valor Agregado y a las Ganancias), a costa de mejorar

el ahorro y la inversión o de considerar algún criterio de equidad social. Por otra parte, la Dirección General Impositiva (DGI) logró una mejor recaudación, persiguiendo a los evasores, incluso a los “ricos y famosos”, se creó la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) se convirtió en un número de identificación tributaria.

Con las cuentas fiscales mejoradas y serio rumbo adoptado, el gobierno pudo renegociar su deuda externa, en el marco del **Plan Brady**, acordando un plan de pagos razonable. La Argentina volvió a ser confiable para los inversores globales, en momentos en que una masa de dólares circulaba por el mundo a la búsqueda de “mercados emergentes” entre 1991 y 1994, entró al país una cantidad importante de dólares, con los que el Estado cumplió sus compromisos y saldó su déficit, y las empresas se re-equiparon. La estabilidad lograda con la convertibilidad potenció el primer proyecto reformista, retomado por el ministro Cavallo.

Fue decisivo el apoyo del presidente Menem, que se encargó sobre todo de lidiar con los viejos peronistas. Durante cuatro años, ambos se potenciaron, combinando claridad en el rumbo con intuición política. Así fortalecido, el equipo gobernante dejó de estar a merced de los humores de los operadores financieros, los acreedores o los grandes empresarios, y pudo fijar un rumbo político y económico de forma independiente.

Cavallo avanzó las reformas estructurales iniciadas en 1989. Para achicar el déficit fiscal, se vendieron empresas del Estado, pero la privatización de las de electricidad, gas y agua

YPF fue privatizada por etapas. Primero se la fraccionó, se vendieron las refinerías y se entregó a los contratistas las áreas con reservas comprobadas de petróleo, que pudieron exportar libremente. Luego se vendieron las acciones; diversas agencias del Estado conservaron una cantidad importante, y los trabajadores otra parte. Con los ingresos se saldaron deudas con los jubilados, lo que sirvió para atenuar las opiniones contrarias.

Se privatizaron los servicios de jubilación (AFJP) lo que implicó un problema fiscal inmediato, al perderse los aportes de los trabajadores del estado y pasar al ámbito privado, pero se esperaba un beneficio a mediano plazo, cuando estas nuevas empresas movilizaron una considerable masa de ahorro interno (cosa que nunca sucedió).

Hubo resistencias en el Congreso, y finalmente se acordó mantener en parte el régimen estatal.

En tanto la flexibilización del régimen laboral (quita de derechos al trabajador) los sindicatos se opusieron al igual que la desregulación de las obras sociales (favoreciendo a los bancos). Con las provincias se firmó un Pacto Fiscal, para que acompañaran la política de reducción de gastos, pero se tuvo una amplia tolerancia con el empleo de recursos fiscales para paliar los efectos del ajuste. La provincia de BSAS recibió un sustancioso Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, que significó un millón de dólares por día.

De ese modo, aprovechando el buen momento del mercado internacional, mientras se avanzaba en reformas se atenuaron sus efectos más duros. Vistos en la perspectiva de lo pasado y lo por venir, fueron tres años dorados (gracias a los dólares de las privatizaciones) el Producto Bruto creció en forma sostenida, a tasas más que respetables, la inflación cayó drásticamente, creció la actividad económica y el Estado mejoró su recaudación y hasta gozó de un par de años de superávit fiscal, en buena medida debido a los ingresos por la privatización de las empresas. El consumo se expandió, con créditos pactados en dólares; muchas personas viajaron al exterior y otras compraron artículos importados, abaratados por la baja de aranceles.

Mientras tanto el desempleo, que pasó del 7 al 12% en 1994. Cada privatización estuvo acompañada de una elevada cantidad de despidos, sobre todo en las empresas estatales. Los efectos se disimularon al principio, por las importantes indemnizaciones pagadas, pero explotaron a partir de 1995. Cerraron muchas empresas privadas, que sufrieron la competencia de los productos importados; sobrevivieron las que se tecnificaron, incorporaron nuevas maquinarias y redujeron su personal, y también las que se convirtieron en importadoras. Otros sectores eran golpeados por el congelamiento de sus haberes, como los empleados estatales o los jubilados, por el encarecimiento de los servicios públicos, debido a la privatización de las empresas o por los cortocircuitos financieros de varios gobiernos provinciales.

Ante tal mal augurio, La Secretaría de Desarrollo Social puso en marcha distintos planes destinados a lo que se llamó la reconversión de los desocupados, como por ejemplo el estímulo a los microemprendimientos, pero fue una acción ocasional e ineficiente. Aunque se priorizó más el apoyo a los grandes empresarios que a los

desocupados. La industria automotriz recuperó casi todos sus beneficios, y los grandes exportadores recibieron distintas compensaciones fiscales. Los contratistas del Estado tuvieron el premio mayor: Algunos grandes grupos, como Macri o Pérez Companc se enriquecieron

Hacia 1994, pasada la euforia, se advertía la crisis que produjo dichas transformación. La sobrevaluación del peso, consecuencia de la convertibilidad, afectó a los exportadores. El gobierno había renunciado a las herramientas de compensación, como el crédito subsidiado o el manejo de las tarifas de los servicios públicos, y sólo mantuvo los reintegros a las exportaciones. La solución tradicional (una devaluación que hiciera más competitiva la producción local) era imposible, y la convertibilidad se iba convirtiendo en una trampa mortal.

Para sobrevivir día a día, enjugar el déficit y honrar los compromisos con los acreedores externos (fijados en el Plan Brady) eran indispensables nuevos préstamos. Ya la decisión no dependía del FMI, sino de inversores globales, como los grandes fondos de inversión lo que suponía que cualquier crisis en el mundo haría que dichos se fueran, por la convertibilidad, la economía argentina se había tornado extremadamente vulnerable.

A principios de 1995 el “efecto Tequila” (una devaluación del peso Mexicano) produjo una corrida mundial de inversores que abandonaron los mercados emergentes. En la Argentina hubo un retiro masivo de fondos externos y se incrementó el déficit fiscal y la recesión, y la desocupación trepó al 18%. El gobierno propuso hubo una poda presupuestaria, reducción de sueldos estatales, fuerte aumento de impuestos y un consistente apoyo del FMI y del Banco Mundial. En lo inmediato, la “crisis del Tequila” fue superada. Pese a la corrida, el sistema bancario pudo ser salvado(los bancos internacionales nunca pierden) algunos bancos nacionales cerraron o fueron fusionados Muchos de los dólares fugados volvieron El PBI que cayó el 4% en 1995, se recuperó en 1996 y avanzó en 1997, creciendo del 8%. Pero la desocupación no bajó y se mantuvo apenas por debajo del 15 %.

En las elecciones de 1995 Menem fue reelecto como presidente (por la salida de la crisis de tequila) y quedó claro que no se debía abandonar la convertibilidad. Pero un dato inquietante era el crecimiento de la deuda externa, que pasó de 60 mil millones de dólares de 1992 a 100 mil en 1996. Definitivamente, la economía argentina dependía del flujo de capitales externos y de las volátiles decisiones de los inversores, cada vez más preocupados por los sucesivos derrumbes en los mercados emergentes..

Cavallo Inició una nueva serie de privatizaciones (el Correo y las centrales nucleares) declaró la emergencia previsional y restringió los fondos a los gobiernos provinciales (agudizando los problemas del interior) muchos no pudieron pagar los sueldos de sus empleados, y luego se vieron obligado a realizar su propio ajuste.

Pero Cavallo quedó en el ojo de la tormenta. Los políticos peronistas se hicieron eco del fuerte malestar social, desde el Congreso criticaron ministro. Cavallo se enfrentó también con los más cercanos de Menem por ejemplo: Con la ley de patentes medicinales, Cavallo chocó con los senadores, encabezados por Eduardo Menem, que defienden al poderoso lobby de los laboratorios locales. Con la privatización del Correo, chocó con el empresario postal Alfredo Yabrán, que manejaba negocios vastos y poco conocidos, a quien acusó de evasor de impuestos y de mafioso; también involucró a los ministros de Interior y de Justicia (ambos del círculo íntimo del presidente) Con sus acusaciones, instaló en la discusión pública el tema de la corrupción gubernamental, que creció en los años siguientes. La relación con Menem se rompió y lo hecho, y en julio de 1996 Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, un economista ortodoxo que presidía el Banco Central.

Fernández se preocupó principalmente del ajuste de las cuentas fiscales. Elevó los impuestos, redujo el número de empleados públicos y recortó el presupuesto. Además, impulsó las privatizaciones pendientes: el Correo, los aeropuertos y el Banco Hipotecario Nacional, y vendió las acciones de YPF en poder del Estado, inclusive la “acción de oro”. El sector político del gobierno, preocupado por las futuras elecciones presidenciales, puso obstáculos. Así fracasó en el Congreso el proyecto sobre flexibilización laboral, (una petición del FMI) incluso lo hizo por decreto de necesidad de urgencia y fue rechazado por la justicia en 1997. Menem abandonó la reforma y su ministro de Trabajo acordó con los gremialistas una ley intrascendente. Fernández siguió defendiendo la ortodoxia presupuestaria: se opuso a una ley sobre mejoramiento salarial para los docentes y rechazó un ambicioso proyecto de construcción de 10 mil km de autopistas (que hubiera significado un rápido descenso de

la desocupación) En vísperas de elecciones de 1999 y en un contexto cada vez más recesivo, el gobierno estaba entre la problemática de la recesión y las cuestiones electorales

La jefatura

En 1989 Menem procedió a ampliar los márgenes de poder del Ejecutivo, estirando los límites de lo legal y hasta subvirtiendo algunas de sus instituciones. Con la ampliación de la Corte Suprema (en la que designó cuatro miembros de su confianza) se aseguró la mayoría; la Corte falló en favor del Ejecutivo en cada situación discutida, y hasta avanzó por sobre jueces y Cámaras (que fue removida por Néstor kirchner luego del escandaloso fallo a favor de mauricio macri por la causa de contrabando agravado de autos a uruguay en agosto del 2002)

Para eliminar controles y restricciones, removió a casi todos los miembros del Tribunal de Cuentas y al fiscal general y nombró por decreto al procurador general de la Nación, redujo el rango institucional de la Sindicatura General de Empresas Públicas. Más tarde, cuando el Congreso empezó a cuestionar algunas de sus iniciativas, Menem recurrió a los vetos de las leyes y a los Decretos de Necesidad y Urgencia. Todo ello fue convalidado por representantes, funcionarios y magistrados, quienes aceptaron esta delegación de autoridad en el presidente.

A eso le sumó un estilo de gobierno singular. Se concentró en la política, pero no se ocupó mucho de las cuestiones de administración o gestión, que delegó en un grupo de colaboradores de destacada capacidad, como los ministros Carlos Corach o Cavallo. Después de separarse de su esposa, Zulema Yoma (a la que debió desalojar



de la quinta de Olivos) transformó esta residencia en una suerte de corte con el que también recorrió el mundo a bordo del tango 01 su lujoso avión presidencial. Integraban el grupo antiguos amigos personales y compañeros de su vieja vida nocturna a los que sumó a políticos de provincia, sindicalistas o antiguos militantes, reclutados de los más diversos ámbitos del peronismo. A los vínculos de amistad se sumaron otros, derivados del poder y sus beneficios. “El jefe”, como empezó a llamárselo, concedía a sus fieles protección e impunidad, y distribuía con generosidad los frutos de un tráfico de influencias (foto) Este círculo íntimo compartió responsabilidades dirigido por el ministro Cavallo, que a menudo entró en conflicto con las huestes presidenciales.

Preocupado por la opinión de los inversores externos, Cavallo trató de corregir las formas más groseras de la corrupción y los escándalos, como el protagonizado por Amira Yoma, cuñada del presidente y su jefa de audiencias, que apareció vinculada con el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

Menem tenía un talento para seducir a liberales como a peronistas y con un discurso al estilo perón, tomando frases de él y colocándose al nivel de roca yrigoyen o el mismo perón, como un líder democrático, carismático y mediático que logró mostrar a todos por la televisión en sus apariciones o en sus momentos de relax se lo mostraban como un presidente moderno que jugaba al fútbol, basket o al golf o simplemente reuniéndose con estrellas que pasaron por la argentina. Menem sumó apoyos fuera del movimiento, adecuados para su nueva orientación: el ingeniero Alsogaray, jefe de la uceDé, o el periodista televisivo Bernardo Neustadt, muy ligado al establishment, que le organizó una manifestación a favor la llamada “Plaza del sí”, en abril de 1990.

En suma, Menem demostró que, para gobernar podría prescindir del peronismo y de sus cuadros.

Los recursos del Estado fueron usados para construir su jefatura. El movimiento “renovador” se disolvió, y muchos de sus dirigentes se incorporaron al menemismo. En la provincia de BSAS, Cafiero fue reemplazado por el vicepresidente Eduardo Duhalde, electo gobernador en 1991 y reelecto en 1995. (Ayudado por el Fondo de Reparación Histórica) Duhalde construyó en la provincia un aparato político y se perfiló como candidato a la sucesión presidencial. Entre los sindicalistas, Saúl Ubaldini intentó nuclear a los trabajadores estatales, pero Menem logró la adhesión de otros sindicalistas ofreciendo jugosas remuneraciones de las privatizaciones y estos

aceptaron. En los comicios de 1991, Menem mediatizó a sus dirigentes como “Palito” Ortega y el automovilista Carlos Reutemann fueron electos gobernadores de Tucumán y Santa Fe respectivamente. Estas elecciones dejaron el claro que Menem era el nuevo “jefe” del peronismo. En cambio un grupo de diputados, “los ocho”, que encabezados por Carlos “Chacho” Álvarez abandonaron el partido. Entonces Menem comenzó a hablar de “actualización doctrinaria” del peronismo: declaró que se apartaba de la línea histórica trazada por Perón (aunque afirmó que el líder hubiera hecho lo mismo) y empezó a pensar en la posibilidad de su re-reelección.

En las elecciones para convencionales de abril de 1994 el justicialismo perdió votos igual que la UCR que benefició del Frente Grande, opuesto a la reforma, que alcanzó el 12% y se impuso en la Capital Federal y en Neuquén. Era una fuerza política nueva, que reunió a los peronistas disidentes de Chacho Álvarez, grupos socialista, democristianos y militantes de organizaciones de derechos humanos como Graciela Fernández Meijide. Este luego se unió en otro frente llamado Frente para un País Solidario (Frepaso), que sumaba al Frente Grande un nuevo grupo peronista disidente encabezado por el exgobernador mendocino José O. Bordón. Menem, acompañado por Carlos Ruckauf, derrotó a la fórmula Bordón-Álvarez, que dejó al candidato radical Horacio Massaccesi en un tercer lugar. El triunfo de Menem fue muy claro: logró prácticamente el 50% de los votos.

La oposición política fue nula la UCR no pudo remontar el desastre de 1989 y en las elecciones de 1991 sólo ganó en la Cap Federal, Córdoba, Río Negro, Chubut y Catamarca. En 1993 perdió la Capital (bastión antiperonista).

En definitiva la UCR no supo enfrentar a Menem con su reforma política que Alfonsín no supo encarar en 1987.

En 1990 Menem clausuró el flanco militar y cerró, de un modo inesperado, el proceso iniciado en 1983. La cuestión militar tenía dos aspectos: el castigo a los responsables del terrorismo de Estado y el sostenido reclamo de los “carapintadas”, que apuntaba a la remoción de la conducción del Ejército. Antes de llegar al gobierno, Menem había establecido sólidos contactos con ellos, y en especial con el coronel Mohamed Alí Seineldín.

Una de las primeras medidas que tomó unilateralmente el presidente fue el indulto a los militares sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990 indultando civiles incluyendo a los miembros de las juntas condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 al procesado ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y los líderes de las organizaciones guerrilleras. Mediante estos decretos fueron indultadas más de 1200 personas.

Pese a la fuerte movilización en contra de la medida. Poco antes de este segundo indulto, los “carapintadas”, encabezados por Seineldín, se habían sublevado nuevamente, reclamando el cumplimiento de una promesa de Menem: remover al alto mando militar y entregarles la conducción del Ejército. Menem ordenó una represión en regla y los mandos militares acataron la orden. Hubo en total 13 muertos y más de 200 heridos; los responsables fueron juzgados y Seineldín fue condenado a prisión perpetua.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos de Menem son conocidas como las *leyes de impunidad*, aunque las dos primeras fueron leyes votadas por el parlamento y con el libre juego de la oposición; en cambio el indulto fue una decisión unilateral e inconsulta y muy posterior a la sanción de las leyes. Luego en 2003 Néstor Kirchner impulsó una ley que fue votada por el Congreso y declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad lo que abrió la cárcel a los represores.

El general Martín Balza asumió la jefatura del Ejército y logró mantener la disciplina y la subordinación del Ejército al poder civil, en medio de circunstancias difíciles. El presupuesto militar fue drásticamente reducido, en el contexto del ajuste de los gastos estatales, y se privatizaron numerosas empresas militares. En 1994 murió en Zapala el conscripto Omar Carrasco (víctima de malos tratos por parte de militares) el escándalo, cuando Menem preparaba su reelección, culminó en la supresión del servicio militar obligatorio y su reemplazo por un sistema de voluntariado. La función de las FFAA disminuyó pero el gobierno encontró para estos una alternativa profesional atractiva en la participación militar en acciones internacionales, lideradas por las Naciones Unidas o por EEUU.

En 1995 Balza realizó una crítica de la acción del Ejército en la dictadura y afirmó que la “obediencia debida” no justificaba los actos aberrantes cometidos. Coincidió con la confesión de un oficial de Marina, quien declaró haber participado en los llamados “vuelos de la muerte”. Se sumaron así la primera autocrítica militar y el

primer reconocimiento por parte de un protagonista y provocó reacciones hostiles en el Ejército, pero contribuyó al comienzo de la revisión de lo actuado durante el Proceso.

La iglesia le dio su apoyo a menem con el cardenal Antonio Quarracino arzobispo de BSAS, pero otro grupo de obispos reclamaban políticas de a favor de los pobres a medida que los ajustes y reformas avanzaban. Quarracino evitó críticas en la Conferencia Episcopal a su vez, Menem lo acompañó en posiciones sostenidas por el Papa como el rechazo del aborto y el “derecho a la vida”. Así, Menem se hizo aceptar por el sector eclesiástico pragmática, si se tiene en cuenta su condición de divorciado y su conducta personal poco recatada (mujeriego).

Otro apoyo importante fue de los presidentes estadounidenses como George Bush y Bill Clinton. El canciller Guido Di Tella las denominó “relaciones carnales”. La Argentina abandonó el Movimiento de Países No Alineados, se clausuró el Proyecto Cóndor de construcción de misiles, se respaldaron todas las posiciones internacionales de Estados Unidos y se lo acompañó en sus empresas militares, enviando tropas al Golfo Pérsico y a la ex Yugoslavia. Involucrarse en las cuestiones de Medio Oriente tuvo un precio: dos terribles atentados con explosivos, uno en la embajada de Israel y otro en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Di Tella inició negociaciones con Inglaterra sobre las islas Malvinas, y postergó la cuestión de la soberanía, para solucionar las nuevas y urgentes cuestiones sobre derechos pesqueros. En 1991 resolvió las cuestiones limítrofes pendientes con Chile, con excepción de dos: Laguna del Desierto (donde el arbitraje internacional fue favorable a la Argentina) y los Hielos Continentales, que trajo un fuerte debate y postergó el acuerdo final hasta 1999. Durante todo este período, Menem viajó mucho al exterior y lució su imagen de vencedor de la inflación y reformador exitoso. Fue un personaje popular en el mundo.

Pese al ajuste inicialmente no hubo oposición pero pronto comenzarán a aparecer como los trabajadores de empresas privatizadas, empleados de estados provinciales, jubilados y docentes. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y luego el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) encabezado por el camionero Hugo Moyano, lograron coordinar sus protestas en la Marcha Federal, de julio de 1993, y un posterior paro general al que no adhirió la CGT. En diciembre de 1993, se produjo en Santiago del Estero un estallido violento: una pueblada, con incendio de edificios públicos y viviendas de políticos, que inició una nueva forma de protesta.

Desde 1991, Menem comenzó a plantear la cuestión de su reelección, lanzando la consigna “Menem 95” pero el problema estaba en el Congreso: la reforma constitucional debía ser habilitada en ambas Cámaras, por dos tercios de los votos. En 1993, Menem logró la aprobación del Senado, y convocó a una consulta popular para presionar a los diputados de la oposición. También exploró la posibilidad de hacerla aprobar por ley. La UCR estaba dividida, pues Alfonsín se oponía y en noviembre de 1993, Menem y Alfonsín acordaron en secreto (el llamado “Pacto de Olivos”) las condiciones para la reforma constitucional, que habría de contener la cláusula de reelección y una serie de modificaciones impulsadas por la UCR: elección directa, con balotaje, reducción del mandato a cuatro años, con la posibilidad de una reelección consecutiva (pero sin vedar la efectividad futura), creación del cargo de jefe de Gabinete, designación de los senadores por voto directo, incluyendo un tercero por la minoría, elección directa del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, creación del Consejo de la Magistratura y reglamentación de los Decretos De Necesidad y Urgencia.

Un país transformado

Los cambios más importantes fueron el del retroceso de la inflación (que estuvieron presentes en casi todos los gobiernos.) El Estado redujo la asistencia estatal a muchos sectores a través de promociones o subsidios, hubo una apertura de la economía a los capitales y a los bienes importados, y, como alternativa, se promovieron las exportaciones. Las consecuencias fueron variadas. (fueron catastróficas)

El golpe más fuerte lo recibió el sector industrial volcado al mercado interno, surgido en los años treinta y cuarenta como consecuencia de las políticas de sustitución de importaciones: muchas empresas cerraron en especial entre las pequeñas y medianas (Pymes) y sólo sobrevivieron optimizaron sus procesos de producción.

Algunas se convirtieron en importadores otras se vendieron a empresas extranjeras, esto produjo una gran masa de desocupados.

(sumado a los despidos en las empresas estatales como YPF) uno de los rasgos dominantes de la nueva Argentina. En el sector agrario la transformación se sintió de forma positiva potenciada por los precios internacionales que mejoraron desde 1996 y alentaron los cambios productivos. El motor estuvo en los cereales y las oleaginosas. Se incorporaron los fertilizantes y herbicidas que aumentó la productividad y de maquinarias de mayor magnitud y velocidad, la siembra directa y el uso de semillas transgénicas y del glifosato de gran demanda en los mercados mundiales. Se expandió la frontera agraria superando los límites de la pampa húmeda. La soja, los aceites y los cereales incrementaron sus exportaciones. Esta eficiencia no mejoró la demanda de empleo ni derramó sus beneficios al resto de la sociedad tampoco lo hicieron los empresarios que buscaban subsidios del estado.

El Estado se fue desentendiendo de sus funciones sociales, aun de las más básicas. Para achicar su déficit, el Estado nacional transfirió su responsabilidad a los estados provinciales, y hubo un deterioro en la calidad de vida. El discurso neoliberal, al que se apeló para impulsar reformas (no siempre coherentes) sin dejar margen a lo social, todo el debate se redujo a la economía, y sobre todo a la “estabilidad”. Así la sociedad cayó en la desilusión de mejorar sus derechos esenciales como el buen salario, el pleno empleo, el derecho a la salud, la educación, la jubilación y, en general, a la igualdad de oportunidades, garantizada por el Estado.

la nueva pobreza se exhibió de manera progresiva cuando la familia debió emigrar a una vivienda más económica, o cuando frecuentaban los “clubes de trueque” buscando provisión de las necesidades básicas,

La formación de un extenso mundo de pobreza fue el dato más significativo de la nueva sociedad. Este mundo era más visible en el conurbano de Buenos Aires (que ya alojaba a una cuarta parte de la población del país) y también en otros conglomerados como el de Rosario. Los cambios laborales fueron decisivos: reducción del empleo estable, aumento del trabajo ocasional o “en negro”, baja de los salarios y aumento de la desocupación. Desde el punto de vista del trabajador, significó una pérdida de cantidad y calidad del trabajo. Los índices que medían niveles salariales o de desempleo fueron perdiendo sentido, en beneficio de los referidos a la pobreza o indigencia, basados en los hogares y sus necesidades. Se ha estimado que en el Gran Buenos Aires hacia 2000 el índice de pobreza variaba entre el 25% en las zonas más protegidas y el 43% en las más abandonadas.

La retirada del Estado fue el la peor del gobierno menemista: La atención médica, que ya era desigual se deterioraron por sus miserables presupuestos y por la concurrencia masiva de carentes de obras sociales sindicales. las escuelas fueron de las pocas instituciones estatales que permanecieron en pie. Se convirtieron en agencias múltiples, dedicadas a ofrecer alimentación, salud o contención familiar, a costa de su función docente. Otros factores concurren en el deterioro de la escuela pública y una reforma educativa mal encarada particularmente en la provincia de BSAS que destruyó las instituciones existentes sin alcanzar a reemplazarlas por otras. Quien pudo pagarlo, abandonó la escuela pública, que perdió su tradicional papel integrador y se convirtió en otra institución reproductora de la desigualdad.

También retrocedió el Estado en su función de proveer seguridad. En los grandes conglomerados se hizo más difícil la prestación de servicios, en parte por el acelerado crecimiento de la población y contribuyó la propia corrupción de la institución policial, en particular la de la provincia de Buenos Aires, la célebre “Bonaerense” participó en las distintas actividades delictivas: las tradicionales, como el juego y la prostitución, y las más novedosas, como el robo de autos y camiones, el tráfico de drogas o los secuestros.

La gran transformación tuvo efectos contundentes en la política, sobre todo en el Gran Buenos Aires, de decisivo peso electoral. En las barriadas pobres, la sociedad se articuló en torno de un complejo universo de sociedades de fomento, juntas municipales, cooperativas, comunidades parroquiales o evangélicas, centros sociales y culturales, clubes de fútbol o comedores. En este entramado social surgieron dirigentes, comúnmente llamados “referentes”. Estas organizaciones sociales tuvieron una capacidad de establecer un cierto orden ayudar en la solución de las situaciones de emergencia. Su tarea requería relacionarse con la administración municipal que a través de funcionarios de distinto nivel, repartía de manera selectiva los bienes y servicios asignados con criterios más

universales. Se planteó un desafío para los partidos políticos. Quien más rápido se adecuó a estos cambios fue el peronismo, a través de una densa red de unidades básicas, promovidas por espontáneos punteros. Las unidades básicas fueron simultánea o alternativamente comedores, jardines o centros culturales, convertidos en potenciales beneficiarios de los subsidios destinados a las organizaciones no gubernamentales. Le dieron al Partido Justicialista (PJ) una organización permanente, flexible y autofinanciada

El fin del menemismo

Al finalizar su segundo mandato y ante una inminente crisis internacional de “economías emergentes” como la de Tailandia(1997) y el derrumbe de Rusia, Corea del sur y Japón la que terminó con la confianza global en las “economías emergentes” y reorientó las inversiones hacia mercados más seguros. Otro golpe duro fue la devaluación de la moneda brasileña, a principios de 1999. Y alteró las relaciones comerciales con el Mercosur. Cayeron las exportaciones y hubo un aluvión de importaciones. Las empresas locales reclamaron protección, y las más grandes consideraron la posibilidad de trasladarse a Brasil. La devaluación del peso, que habría solucionado de manera sencilla estos desequilibrios, era imposible por el régimen de la convertibilidad, que comenzó a mostrar su cara negativa.

La crisis fue más profunda y prolongada que la del “Tequila”. Todo se sumó: aumento de los intereses de la deuda, escasez y alto costo del crédito, caída de los precios de productos exportables y recesión interna. En 1998, el PBI retrocedió alrededor del 4% y la producción de automotores cayó casi a la mitad. Muchas empresas y bancos fueron vendidos a corporaciones multinacionales o a grandes fondos de inversión. El gobierno de Menem llegó a su final sin margen siquiera para hacer beneficencia electoral, y cerró su presupuesto con un déficit abultado y una deuda externa que trepaba por entonces a 160 mil millones de dólares, el doble que en 1994.

Menem empezó a sufrir una oposición social cada vez más fuertes. Quienes callaron pronto hablaron antes de 1995, las manifestaciones sociales habían tenido escasa difusión luego se hicieron más violentas y espectaculares en varias provincias, encabezadas por empleados públicos que cobraban en bonos provinciales de dudoso valor, en Tierra del Fuego, el retiro de las fábricas electrónicas, ante el fin del régimen promocional. En 1996 CGT, el MTA y la CTA se unían para realizar dos huelgas generales contra la ley de flexibilización laboral y la política económica, la oposición política impulsó una protesta ciudadana consistente en un apagón eléctrico y un “cacerolazo”. En esa época, la Iglesia cambió su posición y empezó a sumarse a las protestas. En 1997, los gremios docentes instalaron frente al Congreso una “carpa blanca”, donde desarrollaron una protesta de gran repercusión en los medios y la opinión, sin el costo de la interrupción de las clases.

También surgió la organización de desocupados, los “piqueteros”, identificados en primer lugar por una forma novedosa de protesta: el corte de la ruta. Comenzaron en 1996 en Cutral Có, en Neuquén, y de manera más contundente poco después en Tartagal y General Mosconi, en Salta. En ambos lugares la presencia de YPF era central en toda la vida comunitaria, y los trabajadores despedidos encabezaron la protesta. Los “piqueteros” cortaron las rutas, incendiaron neumáticos, organizaron ollas populares y reunieron además a jóvenes que nunca pudieron trabajar, a sus familiares y amigos, dispuestos a enfrentar a pecho descubierto, con piedras y palos, una represión que fue muy dura. Era la movilización de los desocupados, violenta y a la vez reacia a cualquier tipo de acción organizada. El gobierno a veces apeló a la Justicia y otras a la Gendarmería, y entonces hubo violencia, heridos y hasta muertos.

La organización de los desocupados también se desarrolló, en un contexto distinto, en el Gran Buenos Aires, donde el mundo de la pobreza era más antiguo y diverso. la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y la CTA -que incluía distintos grupos gremiales y sociales no peronistas- impulsaron los reclamos de los desocupados, y lo mismo hizo la Corriente Clasista y Combativa (CCC), originada en grupos sindicales de izquierda. El gobierno nacional y el provincial distribuían por entonces distintos planes de ayuda, como el ya mencionado “Trabajar”, principalmente a través de las intendencias y las redes políticas del peronismo. Las nuevas organizaciones reclamaron su parte en el reparto de planes, y lo hicieron cortando rutas.

Este tipo de movilización callejera se acentuó a medida que avanzaba la crisis, involucrando a grupos muy variados: estudiantes, empleados públicos, productores rurales o desocupados, que marchaban, cortaban las calles o atacaban edificios públicos. Simultáneamente, la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1999 agitó el ambiente en el peronismo, donde comenzó a cuestionarse la “gran transformación”. Ya en 1995, apenas re-electo Menem, el gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, anunció su candidatura, tomó distancia del “modelo” y reivindicó las banderas históricas del peronismo. Pese a que la Constitución era categórica al respecto, Menem intentó jugar la carta de otra reelección (la “re-reelección”) en parte para tratar de conservar el poder hasta el final, y lanzó de modo informal su candidatura, distribuyendo millones de camisetas, globos y carteles que decían simplemente “Menem 99”.

Se inició una guerra violenta entre Menem y Duhalde. los medios difundieron ampliamente episodios como la venta clandestina de armas a Croacia y a Ecuador, las exportaciones ficticias de la “mafia del oro”, la “aduanas paralela”, más tolerante que la oficial, o los sobornos de la empresa IBM a los directores del Banco Nación.



También hubo hechos violentos, como la explosión de la fábrica de armamentos de Río Tercero, que habría borrado las huellas del contrabando de armas, a costa de muchas vidas.

Se trató de un “destape”, que instaló el tema de la corrupción en la agenda pública. La Policía de la Provincia de Buenos Aires, “la Bonaerense”, apareció implicada en varios casos de delincuencia, incluido el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994. Poco después estalló el “caso Cabezas” el brutal asesinato de un periodista gráfico, por orden del empresario Alfredo Yabrán, con la complicidad de miembros de la Bonaerense. Poco antes de ser capturado, Yabrán se suicidó. Quedó claro que la corrupción penetraba en todas las instituciones del Estado, y que la violencia era parte de la disputa por el poder y los negocios.

En octubre de 1997, el justicialismo sufrió una fuerte derrota en las elecciones legislativas. Perdió incluso en sus bastiones: Santa Fe y Buenos Aires, donde la esposa del gobernador encabezaba la lista de diputados

chiche Duhalde, Duhalde quedó maltrecho, y Menem lo golpeó aún más: afirmó que sólo él podía ganar en 1999, y se lanzó abiertamente a una nueva re-reelección. Como en 1994, fue ante la corte suprema para habilitar su re-reelección finalmente la Justicia declaró que su proyecto era absolutamente ilegal.

Ambos se desentendieron de las instituciones, y del peronismo, Menem pudo mantener viva la ilusión casi hasta el final de su período. Además, logró herir a Duhalde, que en la campaña electoral se convirtió en un opositor y a la convertibilidad y presentar propuestas alternativas. Los gobernadores se distanciaron del conflicto sin comprometerse con ninguno de los candidatos y cómo 1983 llegaron a la elección sin líder y fueron derrotados. Mientras el justicialismo se desgarraba en su pelea interna, la Alianza avanzó hacia el triunfo en 1999. Apostando a la convertibilidad, se acordó no cuestionarla y poner el acento en la equidad social, las instituciones republicanas y la lucha contra la corrupción. La candidatura presidencial se resolvió mediante una elección abierta, en la que De la Rúa venció a Fernández Meijide. Lo acompañó en la fórmula Chacho Álvarez; en el PJ Duhalde y Palito Ortega eran los candidatos, por su parte, Domingo Cavallo creó otra fuerza política, Acción para la República, para ganar el voto del sector de centroderecha.

En las elecciones de octubre de 1999, De la Rúa y Álvarez obtuvieron un triunfo claro: el 48,5% de los votos, casi diez puntos más que Duhalde. En el momento de asumir, la Alianza gobernaba en seis distritos y tenía mayoría en la Cámara de Diputados; el justicialismo tenía amplia mayoría en el Senado y controlaba 14 distritos, De la Rúa recibió un poder limitado en lo político y condicionado por la crisis económica, que seguía su desarrollo. Pronto se agregaría la dificultad para transformar una alianza electoral en una fuerza gobernante.